El modelo social europeo: ¿ajuste o demolición?

El Estado del bienestar, contra lo que a veces se dice, no es una creación de la izquierda. De hecho, los primeros esbozos de seguridad social llevan la firma del canciller Otto von Bismarck, en la Alemania imperial. Y ya de manera más estructurada, la de Lord William Beveridge, distinguido liberal británico que promovió a partir de 1909 los esquemas de cobertura por desempleo. En 1942 elaboró su famoso Informe que sentaría las bases del Estado del bienestar en Gran Bretaña, esta vez sí, de la mano de los laboristas con Clement Attlee a la cabeza y ya en la posguerra. En otros países, corrientes de la derecha católica o evangélica contribuyeron también a impulsar la protección social. Un conjunto de sensibilidades políticas diversas confluyeron, así pues, en la organización de lo que se ha dado en llamar Estado del bienestar que –con sus muchas variantes y especificidades nacionales– tiene como objetivo común hacer frente a una problemática central inherente a la sociedad industrial moderna.

Es cierto, sin embargo, que los partidos socialistas o socialdemócratas abanderaron el desarrollo del Estado del bienestar y lo elevaron a seña de identidad de un proyecto político que se contraponía –eran otros tiempos– al totalitarismo comunista implantado en el bloque soviético. Y también es verdad que los esquemas de protección social sistematizados en el Estado del bienestar daban satisfacción a exigencias y reivindicaciones sindicales que asumieron los partidos socialdemócratas gobernantes en muchos países europeos durante largos años de la época posterior a la segunda guerra mundial, como en el caso tan señalado de Suecia o Dinamarca. De tal suerte que la impronta de izquierda sobre el *Welfare State* resultó indeleble.

Es en Europa donde más lejos se ha llevado el desarrollo práctico del Estado del bienestar y la teorización acerca del mismo como parte de la solución para superar los desequilibrios de una sociedad escindida y avanzar en la equidad y la justicia. Pero también en Estados Unidos, paradigma de sociedad liberal alérgica a esquemas que puedan tildarse remotamente de *colectivistas*, hay Estado del bienestar, seguridad social, protección social, seguro de paro, programas como *Medicare* o *Medicaid*, si bien carecen de la coherencia y el nivel de institucionalización o desarrollo público que son comunes en Europa.

Y es que las instituciones del *Welfare State* responden a una necesidad básica de la sociedad industrial. Obedecen, por decirlo así, a una lógica sistémica. Disueltos los vínculos de la familia extensa y de la comunidad rural propios de la sociedad tradicional, alguien debe hacerse cargo de la protección frente a las contingencias de la vida de hombres y mujeres, niños y ancianos, dejados a la intemperie. No pueden depender solo de los albures del empleo remunerado, no siempre disponible, que no basta para atender las necesidades de una existencia prolongada en el tiempo que incluirá, lógicamente, periodos y situaciones que hacen imposible la actividad laboral. Por otra parte, la formación de la fuerza de trabajo es asimismo una necesidad ineludible en economías complejas. La enseñanza pública universal y gratuita tiene aquí su anclaje, además de obedecer a la lógica de la ciudadanía propia de una sociedad democrática.

Finalmente, el conjunto de instituciones y prestaciones que hacen frente a las

contingencias de la existencia humana, forman y reparan la fuerza de trabajo, y acompañan y protegen a las personas en un contexto no siempre amable –eficiente pero a la vez demoledor con las flaquezas humanas como es el mercado puro y duro– constituye el núcleo del Estado del bienestar, la base del modelo social europeo. La seguridad social y sus sistemas de subsidios y pensiones, la sanidad universal y gratuita, la enseñanza pública, la amplia red de protección que garantiza un mínimo de cobertura frente al infortunio, son el resultado de un largo proceso de avances y negociaciones y representan un orgullo para Europa, incluso el germen, junto con los valores democráticos, de lo que podríamos considerar la *identidad europea*.

Pero hoy se enfrentan a duras pruebas. Unas son estructurales, derivadas sobre todo de la globalización, que socava sus bases económicas, y del envejecimiento de la población, que modifica los equilibrios que debe observar el sistema. Otras son coyunturales, o al menos así hay que desearlo, relacionadas con la crisis financiera –y posteriormente económica– iniciada en 2008, que ha forzado la adopción de medidas de austeridad y ajuste presupuestario sumamente dolorosas en algunos casos y en algunos países. Los primeras inducen un replanteamiento a medio y largo plazo. Las segundas fuerzan cambios y recortes de prestaciones ya en la actualidad.

Ahora bien, el modelo social europeo se enfrenta a otro desafío de envergadura. La creciente pluralización etnocultural interna de las poblaciones de Europa derivada de la inmigración extracomunitaria introduce un nuevo aspecto. Una nueva dimensión que, sin duda, pondrá a prueba ese principio de solidaridad o fraternidad entre los que se reconocen como propios más allá de las distancias de lugar, de posición o de edad, que es una clave esencial del gran pacto social e intergeneracional en el que se apoya el modelo social europeo. Al decir de investigadores y estudiosos del *Welfare State*, una de las causas (no la única, por supuesto) de su escaso desarrollo en Estados Unidos, el matiz diferencial con el esquema europeo, debe buscarse en el problema racial que ha marcado durante mucho tiempo a la sociedad norteamericana y que hacía imposible ese pacto de solidaridad.

En el dossier que aquí presentamos –que ha coordinado el profesor Joan Romero– se aportan suficientes datos y argumentos para acotar, en toda su complejidad, una cuestión fundamental para el futuro de la sociedad europea, que plantea interrogantes de gran calado, que no admite enfoques simplistas y que realmente merece atención. ¿Subsistirá el vínculo social a los embates de la crisis y de las políticas aplicadas para superarla? ¿Son contraproducentes esas políticas? ¿Es viable el modelo social europeo en la época de la globalización? ¿Hay margen para su racionalización, para la supresión de disfunciones, sin alterar su sustancia? ¿No se hace un uso abusivo de las restricciones económicas objetivas para impulsar una dinámica privatizadora desde la prepotencia del capitalismo financiero? ¿Hay alternativa practicable a este modelo social que no se traduzca en un aumento insoportable del sufrimiento de las personas, de nuestros conciudadanos, de nuestros compatriotas, de nuestro prójimo? ■